



Expediente:	SCQ-132 -0669-2026
Radicado:	RE-01872-2026
Sede:	REGIONAL AGUAS
Dependencia:	DIRECCIÓN REGIONAL AGUAS
Tipo Documental:	RESOLUCIONES
Fecha:	04/06/2026
Hora:	10:04:00
Folios:	6



RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, “CORNARE”,

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “Cornare”, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que mediante la queja con el radicado SCQ-132-0669-2026 del 20 de Mayo del 2026 el interesado denunció “EN UNA COCHERA ESTAN CONTAMINANDO FUENTE HIDRICA CON AGUAS RESIDUALES Y LOS HABITANTES YA NO AGUANTAN LOS MALOS OLORES”

Que en atención a la Queja de la referencia, se realizó visita por parte de los funcionarios de la Corporación el día 27 de mayo de 2026, en la cual se constató que los hechos acaecían en el Corregimiento El Jordán del municipio de San Carlos, lo anterior generó el informe técnico con radicado No IT-03238-2026 del 02 de junio del 2026, en el cual se concluyó lo siguiente:

“(…)

CONCLUSIONES:

Según la Ordenanza 18 del 27 de septiembre de 2002, artículo 145 y su párrafo, se prohíbe la ubicación de cocheras o porquerizas destinadas a actividad comercial con capacidad superior a tres (3) cerdos para cría y mantenimiento dentro de zonas urbanas.

El artículo 145 y su párrafo del Código de Convivencia Ciudadana de Antioquia Ordenanza 18 de 2002 establecen la obligación de las administraciones municipal y departamental de promover campañas de educación, prevención y manejo de conflictos derivados de actividades que puedan afectar la convivencia ciudadana.

En atención a lo anterior, se hace necesario que el ente territorial lidere estrategias de articulación institucional orientadas a la búsqueda de soluciones conjuntas, vinculando al gremio porcícola, al comercio y a las demás entidades competentes.

- Se desconoce la compatibilidad de la actividad con los usos del suelo municipal

La situación evidenciada corresponde a una problemática generalizada en el corregimiento El Jordán del municipio de San Carlos, donde diversas familias desarrollan actividades porcícolas dentro del casco urbano como medio de sustento económico. Durante la visita técnica se percibieron olores ofensivos asociados al desarrollo de la



actividad porcícola. Asimismo, se evidenció la ausencia de barreras vivas o coberturas vegetales destinadas a mitigar la dispersión de olores generados por la actividad.

Se evidenció que el establecimiento no cuenta con tanque estercolero u otro sistema adecuado para el almacenamiento y manejo de lixiviados y aguas residuales provenientes del lavado de las cocheras.

En el sitio se observaron vertimientos directos a fuente hídrica, generados por las actividades de lavado y manejo de residuos líquidos y sólidos provenientes de la explotación porcícola.

De acuerdo con la información consultada en el VUR, el predio figura a nombre de Interconexión Eléctrica S.A.; sin embargo, según información suministrada durante la visita de campo, la propietaria del inmueble corresponde a la señora Diana Cecilia Hincapié, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.550.805. En consecuencia, esta Autoridad Ambiental no tiene certeza sobre la titularidad real del predio

(...)"

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: *"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano"* y en el artículo 80, consagra que *"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"*.

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medioambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 1°: *"El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social"*

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.

Que el Decreto 1076 de 2015, señala, lo siguiente:

"Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas".

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. *Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos"*.

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009 modificado por el artículo 19 de la Ley 2387 de 2024, dispone que: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, y las demás autoridades ambientales,

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las Autoridades Ambientales, las entidades territoriales, los demás centros urbanos, Parques Nacionales Naturales de Colombia y las delegaciones de asuntos ambientales de la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción, entre otras, alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas:

1. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
2. Apreensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y floras silvestres.
3. Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos.
4. Realización de los estudios y evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y características de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, así como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que conforme a lo contenido en el informe técnico con radicado IT-03238-2026 del 02 de Junio de 2026, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho; la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.

Que, frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte Constitucional en la **Sentencia C-703 de 2010**, sostuvo lo siguiente: “Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes “

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones mayores al Medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporación, fundamentada en la normatividad anteriormente citada y haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer **MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA** de descarga de aguas residuales no domésticas generadas por la actividad porcícola sobre fuente hídrica que se están generando en el predio identificado con PK_PREDIOS 6492001000005700087, ubicado en el municipio de San Carlos corregimiento el Jordán. Lo anterior teniendo en cuenta que durante la inspección realizada el 27 de mayo del 2026 y plasmado en el informe técnico con radicado IT-03238-2026 del 02 de junio del 2026, se observó que se tienen fuentes hídricas cercanas, las cuales son contaminadas al realizar los lavados de los corrales y por consiguiente se ven afectadas. Efectuada la valoración del predio, mediante Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al sitio

Medida que se impone a la señora **DIANA CECILIA HINCAPIE**, identificada con cédula de ciudadanía N°43.550.805

PRUEBAS

- Queja con radicado No. SCQ-132-0669-2026 del 20 de mayo del 2026.
- Informe técnico con radicado IT-03238-2026 del 02 de Junio del 2026.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de **DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS GENERADAS POR LA ACTIVIDAD PORCÍCOLA SOBRE FUENTE HÍDRICA**, que se están generando en el predio identificado con PK 6492001000005700087, ubicado en el corregimiento de El Jordán del municipio de San Carlos y plasmado en el informe técnico con radicado IT-03238-2026 del 02 de junio del 2026.

Se realizó recorrido en el lugar de interés, donde se pudo evidenciar que se están generando descarga de aguas residuales no domésticas generadas por la actividad porcícola sobre fuente hídrica que se están generando en el predio identificado con PK_PREDIOS 6492001000005700087, ubicado en el municipio de San Carlos corregimiento el Jordán

Medida que se impone a la señora **DIANA CECILIA HINCAPIE**, identificada con cédula de ciudadanía N°43.550.805

PARÁGRAFO 1º: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron y se dé cumplimiento íntegro a los requerimientos realizados en la presente providencia.

PARÁGRAFO 2º: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.

PARÁGRAFO 3º: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.

PARÁGRAFO 4º: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella.

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora **DIANA CECILIA HINCAPIE**, identificada con cédula de ciudadanía N°43.550.805, para que de manera inmediata realice lo siguiente:

SUSPENDER de manera inmediata toda descarga de aguas residuales no domésticas provenientes de la actividad porcícola hacia fuentes hídricas superficiales, cuerpos de agua, drenajes naturales, el suelo, el sistema de alcantarillado o cualquier otro cuerpo receptor, hasta tanto cuente con los sistemas de manejo y tratamiento requeridos y con las autorizaciones ambientales correspondientes.

INSTALAR un sistema adecuado para el manejo, almacenamiento y disposición de los residuos líquidos generados por la actividad porcícola, mediante tanque estercolero o un sistema técnicamente equivalente que garantice la prevención de vertimientos directos o indirectos al ambiente, en caso de continuar desarrollando dicha actividad en el predio.

IMPLEMENTAR el manejo en seco de la actividad porcícola mediante el uso de aserrín, viruta de madera u otro material absorbente técnicamente adecuado, con el fin de minimizar la generación de aguas residuales y prevenir vertimientos a fuentes hídricas o al sistema de alcantarillado.

IMPLEMENTAR las medidas necesarias para garantizar el adecuado manejo de las excretas sólidas y líquidas generadas por la actividad porcícola, evitando su disposición inadecuada y cualquier afectación a los recursos naturales renovables

IMPLEMENTAR medidas permanentes de control de vectores, incluyendo moscas, mosquitos, artrópodos y roedores, con el fin de prevenir riesgos sanitarios y afectaciones a las comunidades vecinas

IMPLEMENTAR acciones para el control y mitigación de olores ofensivos derivados de la actividad porcícola, evitando afectaciones a la calidad de vida y bienestar de la población circundante

MANTENER condiciones adecuadas de limpieza, orden y saneamiento en las instalaciones donde se desarrolla la actividad porcícola.

GARANTIZAR el adecuado manejo sanitario de los animales en confinamiento, conforme a las condiciones técnicas y sanitarias aplicables.

TRAMITAR ante la autoridad ambiental competente el respectivo permiso de vertimientos, en caso de requerirse la descarga de aguas residuales derivadas de la actividad desarrollada en el predio, de conformidad con la normativa ambiental vigente.

TRAMITAR ante la autoridad ambiental competente la respectiva concesión de aguas, con el fin de legalizar la captación y uso del recurso hídrico destinado a las actividades domésticas y porcícolas desarrolladas en el predio, de conformidad con la normatividad vigente.

ABSTENERSE de continuar desarrollando actividades que impliquen vertimientos o aprovechamiento del recurso hídrico sin contar previamente con los permisos y autorizaciones ambientales requeridos por la ley.

PARÁGRAFO PRIMERO. Hasta tanto el Municipio de San Carlos determine la viabilidad de la actividad porcícola en el predio de acuerdo con los usos del suelo aplicables, la requerida deberá implementar todas las medidas de manejo ambiental y sanitario ordenadas en el presente artículo.

Para allegar la información solicitada, puede ser presentada a través del correo electrónico cliente@cornare.gov.co o a través de cualquiera de nuestras oficinas físicas, señalando que la información aportada va dirigida al expediente de la referencia.

PARÁGRAFO 1º: Se pone de presente que de conformidad a lo que consagra el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 se considera infracción en materia ambiental la omisión al cumplimiento de las órdenes dadas en los actos administrativos emanados por la autoridad ambiental competente.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la Regional Aguas, realizarla correspondiente verificación, para constatar el estado de cumplimiento a los requerimientos realizados en la presente providencia. La cual se realizará conforme al cronograma y logística interna de la corporación

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la señora **DIANA CECILIA HINCAPIE**

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


JOSE FERNANDO LOPEZ ORTIZ
Director Regional Aguas

Expediente: SCQ-132 -0669-2026

Proyectó: Sara Giraldo

Técnico: Ivan Jairo

Dependencia: Regional Aguas

Fecha: 03/06/2026